



Revista de Ciencias Sociales (Ve)
ISSN: 1315-9518
cclemenz@luz.ve
Universidad del Zulia
Venezuela

Romano, Silvina M.; Delgado Ramos, Gian Carlo
Militarización, seguridad y libre mercado de cara a la política exterior de Estados Unidos hacia
América Latina
Revista de Ciencias Sociales (Ve), vol. XVIII, núm. 2, abril-junio, 2012, pp. 227-241
Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28023310005>

- ▶ Cómo citar el artículo
- ▶ Número completo
- ▶ Más información del artículo
- ▶ Página de la revista en redalyc.org

Militarización, seguridad y libre mercado de cara a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina

Romano, Silvina M.*
Delgado Ramos, Gian Carlo**

Resumen

De cara a la política exterior de Estados Unidos (EUA) hacia América Latina (AL) y dando cuenta de las continuidades y discontinuidades de las últimas décadas, el presente artículo se centra en el estudio de la articulación existente entre los lineamientos militares y de seguridad, la asistencia económica y la liberalización del comercio, atendiendo a las prácticas e intereses que subyacen a dicha vinculación. Para ello se revisaron algunos elementos que se consideraron clave a cerca del rol de las fuerzas armadas en la política exterior estadounidense y su relación con la contrainsurgencia en AL. Haciendo eco de los casos de México y Colombia, se analiza desde la perspectiva arriba planteada, tanto el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, como las implicaciones de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) de EUA con esos países. Asimismo, se indaga brevemente lo relativo a la funcionalidad de la asistencia económica y militar en la región. Se concluye que hoy día la política exterior de EUA en AL, más allá del discurso oficial, vincula tanto lo económico como lo militar y los asuntos de seguridad. Lo que se presenta incluye la indagación de bibliografía especializada, fuentes hemerográficas y documentos desclasificados del Departamento de Estado de EUA.

Palabras clave: Militarización, Tratados de Libre Comercio, seguridad, América Latina, política exterior.

Militarization, Security and the Free Market Confronting US Foreign Policy toward Latin America

Abstract

Confronting US foreign policy toward Latin America and taking into account the continuities and discontinuities of the last decades, this study focused on the existing connections between military and security guidelines, economic assistance and market liberalization, paying attention to the practices and interests that underlie

* Licenciada en Historia y Licenciada en Ciencias de la Información. Dra. en Ciencia Política. Becaria posdoctoral de la Coordinación de Humanidades-Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). E-mail: silvinamceste@gmail.com

** Economista y Dr. en Ciencias Ambientales. Investigador de tiempo completo definitivo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. E-mail: giandedlgado@unam.mx

Recibido: 11-11-06 • Aceptado: 12-04-10

these connections. Some elements considered key regarding the role of the armed forces in US foreign policy and their relation to counterinsurgency in Latin America were considered. Echoing the cases of Mexico and Colombia, Plan Colombia and the Merida Initiative as well as the implications of other free trade agreements between the US and those Latin American countries were analyzed using the above-mentioned viewpoint. Likewise, a brief investigation was made about the functionality of economic and military aide in the region. Conclusions were that today, beyond the official discourse, US foreign policy for Latin America connects free market policies and military and security affairs. The study included specialized bibliographic research plus a review of press information in LA and the USA and declassified documents from the US State Department.

Key words: Militarization, free trade agreements, security, Latin America, foreign policy.

Introducción

Los lineamientos del Departamento de Estado durante la gestión de Barack Obama se centran en la diplomacia de las “Tres D”: defensa, diplomacia y desarrollo. En tal contexto, según las palabras de la Secretaria de Estado, Hillary R. Clinton, el “desarrollo” es entendido como: “...la búsqueda de colocar nuestro sector privado [el de EUA] como socio en la solución de problemas” (Clinton, 2010). De este modo, se alinean abiertamente la defensa, la diplomacia y la promoción del empresariado estadounidense, pero dando un supuesto nuevo giro en la estrategia de política exterior de Obama (acercándolo más a los principios del internacionalismo liberal que han caracterizado a las “palomas” en oposición a los “halcones”).

El punto de partida del análisis es una perspectiva propia de la economía política, lo que supone que lo político (incluida la política exterior) no se puede separar de los procesos económicos, y vice-versa. Retomamos en particular los aportes del neomarxismo (Baran y Sweezy, 1974), el imperialismo estadounidense (Appleman, 2007), los análisis críticos realizados por ex funcionarios de gobierno como Barnet (1974) y los aportes de Melman (1972), además de algunos presupuestos de la escuela de la dependencia sobre el modo en que opera el capitalismo en la periferia prima-

rio-exportadora (Gunder Frank, 1970, Dos Santos, 1972, 1975).

A pesar de las diferencias existentes entre estos puntos de vista, consideramos que en cierto sentido coinciden en plantear la relación entre militarización y la política de “puertas abiertas” como estrategias necesarias para garantizar la supervivencia y propagación del capitalismo de posguerra, lo cual implicaba la expansión de los intereses económicos, políticos e ideológicos estadounidenses (privados y públicos).

Tales intereses son precisamente los que subyacen al discurso del “interés nacional” y buscan, ante todo, preservar la “seguridad” de ese país. Por ello no sólo tenemos en cuenta los procesos vinculados al rol de las Fuerzas Armadas y los planes de asistencia en seguridad, sino lo relativo a la “asistencia para el desarrollo” y la liberalización de los mercados, como parte de una misma estrategia estabilización/desestabilización que caracteriza al accionar de la política estadounidense en la región.

A lo largo del texto planteamos algunos procesos y datos con la intención de hacer una invitación a pensar en las continuidades en tales estrategias y prácticas, sin dejar de considerar los cambios que se han dado en las relaciones de EUA y AL, especialmente a partir del “no” al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la presencia de gobiernos que plantean medidas económicas y políticas que

cuestionan, en un grado u otro, la hegemonía estadounidense imperante en la región.

1. Política exterior estadounidense y fuerzas de operaciones especiales

De acuerdo con información brindada por Mazzetti (2010) publicada por el *New York Times*, el contenido de una Orden Ejecutiva firmada por Obama en diciembre de 2009, da cuenta de que la estrategia de política exterior del gobierno en turno ha otorgado un rol clave a la intervención militar (cubierta y encubierta) en territorios estratégicos para los “intereses” y la “seguridad nacional” estadounidense, dentro de los cuales se encuentran algunas zonas y países de América Latina (Mazzetti, 2010).

Tal orden ejecutiva hace alusión a las atribuciones de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), ahora habilitadas para realizar operaciones encubiertas, vinculadas a inteligencia, contrainteligencia y espionaje. Y es que las operaciones especiales se definen como aquellas, “...realizadas en medio ambientes hostiles, denegados o políticamente sensibles con el objeto de lograr objetivos militares, diplomáticos, de información, y/o económicos utilizando capacidades militares para las que no existe ningún requisito amplio de fuerzas convencionales. Pueden llevarse a cabo de forma independiente o junto con las fuerzas convencionales u otras agencias del gobierno. Las operaciones especiales difieren de las convencionales en el grado de riesgo físico o político, en las técnicas operativas, el modo de empleo, en la dependencia de inteligencia operacional detallada y en los activos locales” (U.S. Joint Chiefs of Staff, 2004: 495).

Para lograr lo anterior, se indica, se busca una mayor comunicación con las Fuer-

zas Armadas (FFAA) locales y los grupos que puedan ser de ayuda para “desmantelar las redes terroristas”, a modo de unificar fuerzas. El dato clave es que hasta el momento en que se emite dicha Orden ejecutiva, la CIA y otras agencias de espionaje civiles eran las únicas capaces de implementar esas actividades en territorios que no se encuentran en guerra; pero a partir de la Orden, los militares también pueden llevar a cabo este tipo de operaciones.

De hecho, “...el comando de fuerzas de operaciones especiales estadounidense está conformado por pequeñas unidades militares de élite que pueden llevar a cabo una serie de misiones en territorios hostiles, muchas de ellas secretas (...) las unidades...de contraterrorismo del Comando de operaciones especiales han capturado o asesinado a los terroristas o líderes insurgentes más buscados, incluidos Saddam Hussein y, en mayo de 2011, Osama bin Laden” (The New York Times, 5/06/2012).

De este modo, las mismas FFAA estadounidenses tienen ahora la posibilidad de intervenir “legalmente” por medio de estos operativos encubiertos en “asuntos internos” de otros Estados. Es decir, se da un paso más hacia la intervención directa “en aquellos espacios donde no hay guerra” (intervención que se da gracias a su articulación con grupos económicos y políticos con intereses en EUA y con expectativas positivas con su predominio y presencia en la región) con lo cual es probable que se “incentive” la guerra en cualquiera de sus modalidades, sobre todo la de baja intensidad.

Por otra parte, estos operativos suelen ser acompañados de mecanismos de presión y desestabilización a nivel económico (presionando a favor de la liberalización de los mercados) y políticos (imponiendo la democracia liberal procedural como única alternativa legítima de gobierno).

Lo dicho es de enorme importancia para AL, pues si bien el gobierno de Obama pidió recortes para algunos rubros del gasto militar, vemos que también solicita mayores fondos para el entrenamiento de fuerzas especiales, y, tal como sugiere Saxe-Fernandez (2009), no debería olvidarse que “...fueron fuerzas especiales del ejército de Honduras, adiestradas por EUA las que asaltaron la casa de Zelaya y lo sacaron en pijama”. El presupuesto sigue bajando, mientras que tanto EUA como la OTAN insisten en la conveniencia de implementar “...guerras de operaciones puntuales, quirúrgicas, flexibles, secretas, a distancia, pragmáticas, de pronta respuesta y baratas” (O'Regan, 2012), pues como asegura el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Martin E. Dempsey, “...las capacidades son más importantes que el tamaño. Este presupuesto no lleva al declive militar, sino a un Ejército que puede ganar cualquier conflicto, en cualquier lugar” (O'Regan, 2012).

Las guerras flexibles y los operativos encubiertos están directamente vinculados a la contrainsurgencia¹, que es otro de los objetivos de las FOE, pues deben articular “redes para penetrar, obstaculizar, vencer o destruir las fuerzas de Al Qaeda y otros grupos militantes” (Mazzetti, 2010).

Es vital recordar que las tácticas de guerra no convencionales, que son la base de las FOE, fueron utilizadas al menos desde la presidencia de Kennedy (1961-1963) para combatir la insurgencia y la subversión en la periferia². Es llamativo en este tenor que desde Washington se considere que existe un vínculo natural entre la insurgencia y los terroristas con el crimen organizado, razón por la que EUA debe entonces consolidar su presencia en espacios claves como lo son, hoy por hoy, en América Latina, México, Colombia y la Triple Frontera, ciertamente regiones estratégicas,

ricas en recursos y plataformas de proyección de la *Pax Americana* en el hemisferio.

Otro de los objetivos de las FOE es el de “reunir información sobre inteligencia y construir lazos con las fuerzas locales”. Por cierto, hasta la entrada en vigencia de la mencionada “Orden ejecutiva”, tal función era parte de las atribuciones de la CIA, al menos en lo que se refiere a América Latina. Un claro ejemplo fue la Operación Cóndor, un plan de desaparición y torturas implementado por los gobiernos del Cono Sur para “aniquilar la subversión” durante la década de 1970 (Calloni, 2001).

Lo anterior se repite en la actualidad de AL, en el plano de la “guerra contra el narcotráfico”, por medio de acuerdos de “intercambio de información” como el que firmó EUA con México y siete países centroamericanos, con el objetivo de “cooperar” en materia de seguridad aérea, aumentar el intercambio de información y garantizar una seguridad fronteriza compartida (Infodefensa, 2011).

Tomando nota de lo anterior, cobra mayor importancia el hecho de que el comando de operaciones especiales haya aumentado casi al doble su personal desde 2001; al 2011 se estima que cuenta con unas 66 mil personas –incluyendo personal militar y civil asociado al Departamento de la Defensa. Además, el presupuesto destinado ha aumentado, de 4,200 mdd en 2001, a 10,500 mdd en 2011 (cifras ajustadas al efecto de la inflación) (Schmitt *et al.*, 2012).

2. Plan Colombia, Iniciativa Mérida y la militarización para el “orden interno”

El “apoyo” de EUA en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se ha centrado no sólo en la detección y monitoreo, sino también, afirma Washington, en el emplaza-

miento del ejército, y el apoyo de infraestructura, inteligencia y operatividad; esto es, en entrenamiento de tropas y fuerzas especiales (Seelke *et al.*, 2010). Esto se ha plasmado en el Plan Colombia (PC), el Plan Patriota (PP) y la Iniciativa Mérida (IM) en sinergia con la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAÑ) que constituyen un medio más para garantizar los intereses del sector privado y del gobierno de EU y de sus socios menores locales, proceso que en los hechos toma forma en una compleja y peligrosa dinámica de estabilidad-inestabilidad.

El PC tuvo desde sus inicios como uno de sus ejes clave, la “transformación” y “modernización” de las fuerzas armadas y policiales para combatir la guerra interna (con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y el Ejército de Liberación Nacional), a fin de lograr un cambio en la correlación de fuerzas con la guerrilla, que incluye la disputa entre diferentes actores y sus intereses por el control de territorios estratégicos.

Es por ello que con el PP se consolidan nuevas tareas para el control del territorio colombiano, y para lograr una mayor proyección hacia los países vecinos, colocando entre 14 y 17 mil hombres en toda la zona selvática, especialmente en la región fronteriza del sur (Ecuador) y de oriente (Venezuela), bajo la modalidad de despliegue rápido; una forma de *bajo perfil* impulsada por EUA que es parte de lo que el Pentágono denomina como una “nueva arquitectura militar” (Delgado, 2010). La ubicación no es algo casual, pues se trata de fronteras con países que han experimentado cambios relevantes en sus gobiernos y proyectos de nación³.

Además, para la Fuerza Aérea de EUA, el lugar estratégico de Colombia es claro: “El acceso a Colombia va a reforzar la asociación estratégica con EUA. La sólida cooperación

en las relaciones de seguridad también abre la oportunidad para conducir *un amplio espectro de operaciones a lo largo de Sudamérica* para mejorar las capacidades antinarcóticos” (Gollinger, 2009).

Precisamente, a través del PC, EUA presionó para “regionalizar el conflicto” y la guerra contra el narcotráfico, que llevó a la militarización no solo de Colombia sino de sus vecinos (Bonilla, 2006: 113-116), a la vez que contribuyó al aumento de las tensiones a nivel interamericano (Tokatlán, 2006: 243). A esto debemos sumar que desde la perspectiva de EUA los “culpables” son los países “productores” de narcóticos, dejando en un lugar subsidiario el hecho de que EUA es el principal mercado, tanto de consumo de drogas como de lavado del dinero “del narco” (Sanati, 2010).

En el marco de la IM, la modernización de las FFAA tiene por objeto ganar la correlación de fuerzas contra el “narcotráfico” y el “crimen organizado”, enemigos difusos que han sido ahora aglutinados bajo la etiqueta de “narco-insurgencia”.

Menos difuso es el hecho de que resulta un importante negocio dado el alto gasto público en seguridad y defensa que han asumido los países de AL y que ha sido potenciado a raíz de la puesta en marcha de programas de seguridad como el PC/PP y la IM-ASPAÑ. De acuerdo a la estela dejada por las acciones militares promovidas por EUA, podemos notar que están diseñados para generar una inestabilidad social interna, que no amenaza el *status quo* de los principales grupos de poder locales (aunque sí produce fricciones). Este proceso, una vez desplegado, y dada las dimensiones de la inestabilidad sociopolítica que induce, aunado a las condiciones económicas, “obliga” el aumento continuo del gasto militar y de seguridad por parte de los países anfitriones.

De este modo, en México el incremento porcentual del gasto en seguridad y defensa, entre el 2000 y el 2008, fue de 125% y en Colombia fue del orden del 340%⁴, por lo que se puede argumentar que el PC/PP y la IM-ASPAN han tenido como uno de sus fines inducir tal gasto a cargo del presupuesto público de cada Estado. Y es que el monto asignado por EUA a dichos programas se estima en unos 2,791 millones de dólares (mdd) para el PC/PP (período 2002-2008), y para la IM, desde el 2008 hasta ahora, en unos 1,330 mdd (Seelke, 2010)⁵. Con datos al 2011, algunas fuentes afirman que la “ayuda” de EUA para el Plan Colombia fue de 5.000 mdd en equipamiento y capacitación; mientras que para el caso de la IM, EUA se comprometió con 1.400 mdd (infodefensa, 2011 a). Tomando cualquiera de estas fuentes, la suma de lo aportado por EUA es muy baja comparada con el aumento del gasto público en el rubro, especialmente en el caso de México.

Aunque la cifra para la IM es aún mínima, los planes incluyen la venta de equipo diverso a prácticamente todas las dependencias de gobierno de México. Por ejemplo, se precisa la venta de cinco helicópteros BELL 412 EP, dos aviones de vigilancia marítima modelo CASA 235, restauración y equipamiento de dos aviones de vigilancia terrestre, venta de escáner, de equipo móvil no intrusivo de inspección, de monitoreo-espionaje, de telecomunicaciones, de análisis computacional forense, para la captura de información biométrica, de hardware y software para diversos sistemas de datos, para la modernización de puestos de control y vigilancia fronterizos, etcétera (Congreso de EU, 2008).

Según lo descrito, podemos sostener que el gobierno de EUA, por medio del PC/PP y la IM-ASPAN, procura consolidar una mayor interferencia por medios diferentes a la

asignación de un abultado presupuesto a tales programas (coincidiendo con el objetivo de mantener un “perfil bajo” en la región). La injerencia en materia de seguridad y orden interno por parte de EUA es principalmente marcada en los rubros de “asesoramiento” y “entrenamiento” de personal⁶; la puesta en marcha de acciones conjuntas en suelo, agua y aire; y mediante el estímulo al incremento en el número de contratistas en diversas áreas para asegurar, el orden interno y el control de territorios prioritarios. En el marco de la IM, se sabe que, “…el Pentágono entrena a grupos especiales del Ejército mexicano, y le proporciona equipo para construir y mejorar su capacidad operativa para poder recuperar espacios territoriales y aéreos que usan los narcotraficantes y en los cuales se ha perdido el control y el manejo del Gobierno Federal” (Esquivel, 2010: 10).

A esto se suma que la guerra contra el “narco-terrorismo” se complejiza y genera una amplia desestabilización interna debido a la presencia de policía, servicio secreto, ejército-marina-fuerza aérea, ejércitos o seguridad privada formalmente contratados, paramilitares y demás actores foráneos como asesores, agregados adjuntos en materia de seguridad y antinarcóticos, personal de operaciones encubiertas, etcétera. Lo preocupante es que los grupos de fuerza que no dependen del Estado, de entrada están en buena medida fuera del Estado de Derecho. Así, es de llamar la atención que en noviembre de 2009 se propusiera en el contexto de la aplicación de la IM, “soluciones” al narcotráfico y el crimen organizado ejecutadas por contratistas militares del Pentágono como Blackwater, Jax Desmond o Triple Canopy (Milenio, 30/11/2009).

La asociación del narcotráfico con la insurgencia y el saldo de las prácticas contra-insurgentes implementadas durante la guerra

fria (Romano, 2011), facilitan la criminalización de la resistencia social y la ocupación de territorios de alta prioridad. Si bien no se pretende decir que la IM (o el PC/PP) tiene como fin exclusivo promover un contexto de control social, ciertamente contribuye a ello. México acumula ya más de 60 mil muertos, 10 mil desaparecidos y miles de desplazados asociados a operativos antinarcóticos, al tiempo que se perfila como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y periodistas⁷. Lo llamativo es que en la ola de violencia, han aumentado los asesinatos de líderes sociales, muchos opositores a procesos de despojo y de extractivismo sin control. Se trata de un escenario que se repite en otras latitudes como Guatemala, Panamá, Perú o Colombia (Delgado, 2012).

3. Asistencia económica y militar y los TLC

Tal como lo mencionábamos al inicio del texto, el Departamento de Estado guía sus lineamientos de política exterior según el pilar constituido por las “Tres D” (diplomacia, defensa y desarrollo). Hasta ahora hemos expuesto el tipo de estrategias vinculadas a la “defensa”, pero sin duda, éstas se asocian a lo que el gobierno de EUA entiende como “desarrollo”, esto es la expansión del libre comercio y de las inversiones estadounidenses. Cuando este “desarrollo” se dificulta, el gobierno de EUA promueve entonces la asistencia militar, la asistencia económica y la firma de TLCs como un solo paquete.

En los últimos años, se observa así un mayor impulso de los planes de asistencia para el desarrollo, especialmente a través de la USAID, una agencia que fue creada durante en el marco de la entrada en vigencia de la Ley

para la Asistencia Extranjera (1961) y que ha estado involucrada en asistencia a fuerzas policiales en operaciones contrainsurgentes (United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963, Vol XII, Doc. 90; Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, 2011).

El aumento de la asistencia obedece, a que las pésimas condiciones de vida de las mayorías de AL pueden ser terreno fértil para la propagación del terrorismo (Lancaster, 2009) y el narcotráfico. Esto se visualiza en los múltiples programas de asistencia, muchos de ellos realizados por medio de la USAID (2010). Tomando el período 1996-2012, si se compara la asistencia militar a Colombia (6,895,376,034 dólares) y a México (1,456,661,709 dólares) con los montos para la ayuda económica, 2,226,816,970 de dólares para Colombia y 1,027,476,000 de dólares para México, queda en evidencia el predominio de la primera, donde ambos países suman la mitad de la asistencia militar para toda la región (Just the Facts, 2011).

A este predominio de la asistencia militar, se suman los acuerdos de liberalización de los mercados y la promoción de los TLCs con México, Perú, y más recientemente, con Colombia, pues la injerencia de EUA se ejerce por diferentes vías que adquieren mayor o menor protagonismo según sea lo necesario para los intereses estadounidenses y las oligarquías locales. Tanto Colombia como México se presentan como países clave en términos de recursos estratégicos (minerales y combustibles), así como “trampolines” para penetrar a nivel regional (Colombia como puerta de ingreso al Cono Sur y México, vecino clave y ruta para hacerse del control también de América Central). En el caso del Cono Sur, los lineamientos de EUA han sido contrarrestados por la negativa de gobiernos de la región, in-

cluso por medio de la creación de organismos como la UNASUR y el proyecto del ALBA de integración regional no centrado en las necesidades del mercado. En el caso de América Central, por el contrario, se han incrementado tanto los acuerdos económicos como de seguridad a nivel bilateral y multilateral⁸.

Colombia y México son ejemplos del modelo en que se complementa la estrategia comercial y de inversiones (por medio de los TLC) con la estrategia militar (PC e IM) para garantizar el flujo de materias primas para la instalación de filiales de multinacionales estadounidenses, así como para la apertura del mercado local a las manufacturas/productos de media y alta tecnología e incluso de los excedentes de cereales estadounidenses (Delgado, 2011).

En lo referido al TLC Colombia-EUA, la principal beneficiaria de este acuerdo, es la economía estadounidense, pues como bien afirmaba Obama “El Tratado es una parte importante de los esfuerzos de mi Administración para estimular el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y crear empleos en los EUA, al tiempo que promovemos nuestros valores fundamentales” (Defensa Territorios.org, 2011). La asimetría en la negociación es notoria, pues la mayor reducción de aranceles es la que hace Colombia de 13% a 0, mientras que la rebaja de EUA es de 3% a 0, lo que se refleja especialmente en el sector agropecuario donde Colombia aplica la baja arancelaria mientras que EUA mantiene los subsidios (El Espectador, 9/10/2011). Para un país primario-exportador como Colombia, este tipo de acuerdos generará mayor presión sobre la balanza de pagos, además de que no favorecerá la diversificación ni la industrialización.

Según algunas proyecciones sobre las implicaciones del TLC, la producción de arroz, maíz, aves y lácteos serán algunas de las más

afectadas, pues se espera la llegada de 27.040 toneladas anuales de cuartos traseros de pollos de EUA sin pagar aranceles, lo mismo sucede con el maíz amarillo, del cual entrarán 2 millones de toneladas, así como 130.000 toneladas de maíz blanco. A esto se suma el ingreso anual de 79.000 toneladas de arroz blanco (El Universo, 13/10/2011). Todos estos productos gozarán de la ausencia de aranceles mientras EUA mantiene los subsidios para su producción. La experiencia mexicana es testimonio de este tipo de desbalance. El PIB agrícola pasó del 10% a alrededor del 4% de 1981 al 2011, resultado de la pérdida de la capacidad nacional de producir maíz y frijol en cantidades suficientes para el consumo nacional y de una especialización productiva en ciertas hortalizas y fruta de exportación.

Ahora bien, es importante hacer un paréntesis para vincular este tipo de acuerdos asimétricos con los objetivos del gobierno estadounidense en materia de asistencia, que al menos desde el Punto IV de Truman (1949), están orientados a expandir el mercado y la economía norteamericana, colocando exportaciones de materias primas y manufacturas, impulsando inversiones y generando nuevos consumidores. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto se concretó por medio de instituciones y leyes orientadas a este fin, como el Banco de Importaciones y Exportaciones (ExIm Bank) y la entrada en vigencia de la Ley 480 (Public Law 480) que fue ampliada dando como resultado la “Ley de Alimentos para la paz” de 1960. Entre 1955 y 1966, el 31% del total de las exportaciones agrícolas de EUA fue realizado bajo esta Ley (Slabotzky, 1968).

Vale agregar que hoy por hoy, mucha de la ayuda vinculada al PL480 incluye alimentos genéticamente modificados, negocio de corporaciones como Monsanto (Rebelión, 2002). Asimismo, en el marco del TLC, puede

verse una alianza entre el ExIm Bank y Ban-

cóldex (símil colombiano), considerando las declaraciones del presidente del ExIm Bank, quien asegura que Colombia es uno de los mercados de más rápido crecimiento para EUA dentro del portafolio de bienes y servicios del Banco y el mercado más grande en el año fiscal 2011 (Portafolio, 2012).

En lo referido al TLCAN, ha sido sin dudas la experiencia por excelencia de articulación entre una “integración” asimétrica y los lineamientos de seguridad, según intereses estadounidenses. Desde un comienzo se señaló el asunto de la asimetría entre la economía estadounidense, la canadiense y la mexicana, además de quedar en evidencia que uno de los objetivos más claros de EUA era lograr un mercado seguro para su producción primaria al tiempo que se establecían mejores condiciones para la importación de crudo mexicano (90% del petróleo exportado por México tiene como mercado a EUA).

En uno de los comunicados de George Bush al Congreso para incentivar la firma del TLCAN, expresaba “...un TLC de Norteamérica amarraría el proceso de liberalización comercial en México y aseguraría un más grande acceso para las exportaciones de EUA en el futuro... Un TLC aseguraría el acceso seguro de EUA al mercado mexicano, previendo futuros movimientos hacia políticas proteccionistas” (Bush en Saxe-Fernández, 2001: 186). Como puede verse, resulta muy similar a las declaraciones de Obama sobre la “asociación” asimétrica con Colombia. Sólo que Colombia ya cuenta con los “resultados” de México en el TLCAN.

Considerando datos del TLCAN sólo hasta 2007, se sabe que en México se han perdido más de 2 millones de empleos vinculados al sector agropecuario; desde su creación en 1994 emigraron a EUA alrededor de 300

mil personas provenientes del campo (en los primeros años del tratado emigró la cuarta parte de la población rural, 6 millones de personas). Lo dicho guarda estrecha relación con el hecho de que antes del TLCAN, México dependía de importaciones para cubrir el 20% de sus necesidades alimentarias, mientras que para el 2007 esta dependencia había aumentado al 50%, y siguió incrementándose. Esto no sorprende si se tiene en cuenta que el gobierno mexicano liberalizó de modo total y anticipado, las importaciones de los productos más sensibles, como maíz, frijol y la leche en polvo. Y esto debe situarse en el contexto de total asimetría con EUA, pues mientras México eliminó aranceles, el país vecino aumentó los subsidios y las prácticas ilegales, pues todos los granos básicos de EUA incurren en dumping.

A fines de septiembre de 2011, el movimiento Sin Maíz no hay País, convocó a campesinos de diferentes Estados mexicanos para proclamarse en contra del uso de transgénicos en el campo. En un documento firmado por los asistentes a la movilización, se denuncia que a partir del TLCAN aumentaron las importaciones de granos básicos de EUA, arrasando con la producción nacional y favoreciendo a las industrias agroalimentarias transnacionales (La Jornada, 30 septiembre 2011). La preferencia por las multinacionales, ha quedado especialmente en evidencia en el caso de las concesiones a Monsanto, que ha podido avanzar sobre México con mayor fuerza a partir del acuerdo de libre comercio y la reciente liberalización de cultivos comerciales de organismos genéticamente modificados (OGMs) en la zona de origen del maíz.

Todo lo antes indicado, ha favorecido la “desarticulación” de la producción rural (y del tejido social en las zonas rurales y aledañas), sumado a la pobreza en la urbe, la migra-

ción, la violencia y represión perpetradas desde el Estado. Escenario en que se agudiza la lucha por los recursos y el Estado desata una “guerra contra el narcotráfico” y el “crimen organizado”, que a nivel de discurso oficial se muestra como una lucha contra el “crimen organizado”, pero que en esencia implica la presencia de las fuerzas armadas como garantes del orden interno y la estabilidad frente a los múltiples sectores, movimientos y voces que se levantan contra el orden de acumulación y polarización de la riqueza que se exacerbó, entre otros factores, gracias a la firma del TLCAN y la implementación de la IM. Algo similar se puede advertir en Colombia.

4. Reflexiones finales

La aplicación de doctrinas de contrainsurgencia no obedece a un objetivo militar en sí mismo, sino que está al servicio de intereses económicos y políticos, pues son estrategias implementadas para garantizar el sistema de acumulación imperante en momentos en que esa dinámica se ve amenazada por sectores de la sociedad que se oponen en mayor o menor medida a este orden. Cuando peligra el flujo de materias primas, materiales estratégicos y combustibles de la periferia al centro, adquieren un rol fundamental las FFAA y de seguridad para garantizar la estabilidad y el orden interno.

Esto puede visualizarse hoy en el PC y la IM en México, por medio de los cuales –con la “ayuda” de EUA– se han promovido escenarios de desestabilización-estabilización que facilitan o generan mejores condiciones para la transferencia de excedentes hacia EUA. Pero no puede dejarse de lado el hecho de que en el proceso también se benefician los grupos de poder local, quienes apoyan, ponen directamente en práctica e incluso estimulan tales esquemas de desestabilización-estabilización pese a su costo social,

económico y ambiental para las generaciones actuales y, hasta cierto punto, para las generaciones venideras también.

Consideramos fundamental señalar que incluso en este contexto, en especial a partir de finales de la década de los noventa, son notables las tendencias hacia cambios significativos en AL, ello en parte debido a las consecuencias de la implementación de programas de ajuste estructural en la región. Entre los procesos más destacados, notamos la presencia de gobiernos con propuestas políticas, económicas y sociales que buscan marcar, pese a sus contradicciones, un quiebre con respecto al modelo neoliberal. Indicio de esto han sido y son el gobierno de Evo Morales en Bolivia, de Hugo Chávez en Venezuela y de Correa en Ecuador.

Asimismo, desde estos gobiernos se ha buscado reforzar los mecanismos de integración regional, tendencia que adquirió vigor también en el marco del fracaso del proyecto hemisférico de EUA materializado en el ALCA. De hecho, la creación del ALBA –con el protagonismo de Cuba y Venezuela, y poco después de Bolivia con el Tratado de Comercio de los Pueblos– y la UNASUR, ponen en evidencia la emergencia de modelos de integración que se apartan en buena medida de las propuestas centradas únicamente en lo económico, especialmente en la liberalización del comercio. Cabe señalar también la reciente creación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) por iniciativa del ex presidente brasileño Lula da Silva, y que se postula como un organismo paralelo a la OEA, sin la presencia de Canadá y EUA.

De cara a lo anterior, las alternativas en construcción en el Cono Sur, con todas las observaciones y mejoras que demandan, son claramente apuestas que rechazan la total injer-

rencia y subordinación para con EUA y, por el contrario, buscan construir a su modo un proyecto genuinamente más independiente. En el camino, la integración regional, Sur-Sur, como antes, vuelve a retomar fuerza al colocarse como una medida necesaria para una nueva correlación de fuerzas, tan necesaria para la autodeterminación y soberanía de los pueblos que conforman lo que Bolívar denominó esta “Patria Grande”.

Notas

1. De acuerdo con el manual de campo militar estadounidense de 2006, la insurgencia es definida como “un movimiento organizado destinado a derrocar un gobierno por medio del uso de la subversión y el conflicto armado (...) insurgencia es una lucha político-militar organizada, diseñada para debilitar el control y la legitimidad de un gobierno establecido”. Según el mismo manual, la contrainsurgencia es: “acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y civiles llevadas a cabo por el gobierno para vencer a la insurgencia (Kilcullen, 2010: 1-2). En el proceso iniciado con la denominada Guerra Fría, la mayor parte de los movimientos sociales, políticos y culturales (desde los movimientos guerrilleros hasta los sindicatos) que buscaban un cambio en el status quo, fueron clasificados como “insurgentes”. A partir de la guerra contra el “terrorismo global”, la insurgencia, según la define el gobierno estadounidense, está asociada a los grupos terroristas (Rosenau, 2007), y en AL, se ha asociado al “narco-terrorismo”.
2. Ver: United States Department of State. Foreign Relations. 1961-1963. Vol VIII. Doc. 10
3. Un caso es el de Venezuela, ver: Romano y Delgado, 2011.
4. Las cifras fueron calculadas en torno a datos de 1992 a 2008 retomados de: Gobierno de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. Subdirección de Seguridad y Defensa, 2010; y Benítez Manaut, Raúl; Rodríguez Su-
- mano, Abelardo y Rodríguez Luna, Armando (2009: 64). Datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010; Global Security.org y SIPRI.
5. Las cifras son: 400 millones para el 2008; 720 millones para el 2009 y 210 millones para el arranque del 2010 (Seelke, 2010: 6).
6. Las comillas en los conceptos de “asesoramiento” y “entrenamiento” se debe a que resultan en actividades más amplias. En el caso colombiano, ha trascendido que el entrenamiento a militares incluye la conformación de grupos irregulares acusados de mercenarios –la llamada contrata- y predominantemente extranjeros. Ver: www.colectivodeabogados.org/PRESENCIA-DE-MERCENARIOS-EN. En el caso de México, sólo para mencionar un ejemplo, según Egremy (2010) “...los paramilitares son empleados para incursiones militares en ciertos poblados.” Su dicho se respalda con lo que el 24 de marzo de 2008 declararon Rodolfo y Ramón, milicianos del ERPI, al diario *La Jornada*, cuando afirmaron que “...ya hay células de grupos paramilitares en Metlatónoc, Guerrero, y en otras zonas de La Montaña, o en Tierra Caliente, Costa Chica y Costa Grande”. Para ampliar información se recomienda visitar los sitios de las revistas *Contralínea* y *Proceso* de México.
7. Los datos fueron tomados de Agencia Imagen del Golfo , 7 enero 2012. Ver también: Informe Human Rights Watch sobre México, “Ni seguridad ni derechos” noviembre 2011 <http://www.hrw.org/es/reports/2011/11/09/ni-seguridad-ni-derechos>.
8. El CAFTA (Central America Free Trade Agreement; DR-CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement, en inglés), o TLC (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EUA); Estrategia de Seguridad de Centroamérica-México; Tratado Marco de seguridad democrática en Centroamérica (en el marco del SICA); Convenio de seguridad aeroportuaria (Centroamérica, México EEUU); TLC México-Centroamérica.

Bibliografía citada

- Agencia Imagen Golfo (2012). “60 mil muertos por guerra al narco; 225 mil desaparecidos”. 07/01/12 [en línea] <http://cronica-delpoder.com/seguridad-publica/201201/60-mil-muertos-por-guerra-al-narco-225-mil-desaparecidos-0>. Consultado el 12 marzo 2012.
- Appleman Williams, William (2007). **Empire as a way of life**. New York: IG.
- Archivo Histórico de la Policía Nacional (2011). **Del silencio a la memoria. Revelaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional**, Guatemala [en línea] <http://archivohistoricopn.org/pages/investigacion.php#1>, consultado el 15 octubre 2011.
- Baran, Paul y Sweezy, Paul (1974). **El capital monopolista. Ensayo sobre el orden económico y social de los Estados Unidos**. Siglo XXI. Buenos Aires.
- Barnet, Richard (1974). **Guerra perpetua. Los hombres y las instituciones detrás de la política exterior estadounidense**. Fondo de Cultura Económica. México.
- Bonilla, Adrian (2006). “US Andean Policy, the Colombian Conflict, and Security in Ecuador”. Loveman, Brian (ed.) **Addicted to Failure. US Security Policy in Latin America and the Andean Region**. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Calloni, Stella (2001). **Operación Cóndor, pacto criminal**. La Jornada. México.
- Clinton, Hillary (2010). Remarks on the Obama Administration’s national Security Strategy. US. Department of State. Conferencia en el Brookings Institute. Washington, DC. EUA. 27 de mayo. [en línea] www.state.gov/secretary/rm/2010/05/142312.htm, consultado el 10 de junio de 2011.
- Committee on Foreign Affairs (2009). “Guns, Drugs and Violence: the Merida Initiative and the Challenge in Mexico”, Serial. 111-15, Governmental Printing Office, Washington, EUA.
- Congreso de EU (2008). **Supplemental Appropriations Spending Plan. México, Central América, Haití and the Dominican Republic**. H.R. 2642. Aprobado el 26 de junio. [en línea] <http://justf.org/files/primarydocs/080924merida.pdf>, consultado el 15 de Mayo 2011.
- Defensa Territorios org. (2011). “Aprobación del TLC en EEUU: El documento que recoloniza a Colombia”. 14/10/11 [en línea] http://defensaterritorios.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10366: aprobacion-del-tlc-colombia-en-eeuu- el-documento-que-recoloniza-a-colombia&catid=374:acuerdos-de-libre-comercio&Itemid=447, consultado el 15 de febrero de 2012.
- Delgado, Gian Carlo (2012). “Extractivismo minero, conflicto y resistencia social.” **Realidad Económica**. No. 265. 1 de enero - 15 de febrero. Buenos Aires, Argentina. Pp. 60 – 84.
- Delgado, Gian Carlo (2011). **Imperialismo Tecnológico y el Desarrollo de América Latina**. Ruth Casa Editorial. La Habana, Cuba.
- Delgado, Gian Carlo (2010). “Recursos naturales, seguridad y los “lily pods” del Pentágono. El caso de América Latina.” **Memoria**. No. 242. México.
- Dos Santos, Theotonio (1975). “La estructura de la dependencia” en **Economía política del imperialismo**. Buenos Aires: Ediciones Periferia.
- Dos Santos, Theotonio (1972). **Socialismo o fascismo. El nuevo carácter de la dependencia y el dilema latinoamericano**. Ediciones Periferia. Buenos Aires.

- Egremy Nidia (2010). “Paramilitares: arma gubernamental contra la sociedad” *Contralínea* [en línea] <http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/05/09/paramilitares-arma-gubernamental-contra-la-sociedad/>
- El Espectador (2011). “Aprobación del TLC en su peor momento”. 09/10/11 [en línea] <http://www.elespectador.com/impresso/opinion/columna-304405-aprobacion-del-tlc-su-peor-momento>, consultado 15 febrero 2012.
- Esquivel, Jesús (2010). “Informe en Washington: fracasa la guerra de Calderón.” **Proceso**. No. 1745, 11 de abril. México.
- Global Security Org “World wide military Expenditures” (2011) [en línea] <http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm>, consultado el 10 de febrero de 2012.
- Golinger, Eva (2009). “Breaking News: Official US Air Force Document Reveals the True Intentions Behind the US-Colombia Military Agreement” [en línea] <http://www.chavezcode.com/2009/11/breaking-news-official-us-air-force.html>, consultado el 20 de mayo de 2011
- Gunder Frank, Andre (1970). “El desarrollo del subdesarrollo” en Gunder Frank, Andre; Cockcroft, James y Johnson, Dale, **Economía política del subdesarrollo en América Latina**. Ediciones Signos. Buenos Aires.
- INFODEFENSA (2011). “Estados Unidos y Centroamérica firman un convenio de seguridad aeroportuaria”. 15/07/11 [en línea] www.infodefensa.com/?noticia=estados-unidos-y-centroamerica-firman-un-convenio-de-seguridad-aeroportuaria, consultado el 22 de octubre de 2011.
- INFODEFENSA (2011a). “México, país con el menor gasto militar de América Latina en relación a su PIB”. 31/05/11 [en línea] www.infodefensa.com/?noticia=mexico-pais-con-el-menor-gasto-militar-de-america-latina-en-relacion-a-su-pib, consultado el 22 de octubre de 2011.
- Just the Facts (2011). U.S. Aid to Mexico, All Programs, 2007-2012 [en línea] <http://justf.org/Country?country=Mexico>, consultado 10 Noviembre 2011
- Just the Facts (2011). U.S. Aid to Colombia, All Programs, 2007-2012 [en línea] <http://justf.org/Country?country=Colombia>, consultado 10 de Noviembre de 2011.
- Kilcullen, David (2010). **Counterinsurgency**. New York: Oxford University Press.
- La Jornada (2011). “Exigen proscribir transgénicos en el campo mexicano”. 30/09/11 [en línea] www.jornada.unam.mx/2011/09/30/estados/036n1est, consultado el 4 de octubre de 2011.
- Lancaster, Carol (2009). “USAID in the 21st Century: What do we need for the tasks at hand?” Senate Foreign Relations Committee Sub-committee on International Development, Foreign Assistance, Economic Affairs and International Environmental Protection.
- Loveman, Brian (ed.) (2006). *Addicted to Failure. US Security Policy in Latin America and the Andean Region*. Rowman & Littlefield. Maryland.
- Mazzetti, Mark (2010). “US Expands Secret Military Acts in Mideast and Beyond” *The New York Times* [en línea] <http://www.nytimes.com/2010/05/25/world/25military.html>, consultado el 30 de mayo de 2010.
- Melman, Seymour (1972). **El capitalismo del Pentágono: la economía de guerra**. Editorial Siglo XXI. México.
- Milenio (2009). “Privatizan la guerra contra el narco” 3 de noviembre de 2009. [en

- línea] www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/656481a84786e736e71b1fbe237fad59.
- O'Regan, Evangeline (2012). "Operaciones especiales y aviones no tripulados, el futuro de la guerra". 30 enero de 2012. [en línea] http://defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5229:operaciones-especiales-y-aviones-no-tripulados-el-futuro-de-la-guerra&catid=139:revista-de-prensa&Itemid=312, consultado el 5 de febrero 2012.
- Portafolio (2012). "EX-IM Bank y Bancóldex impulsan el comercio con el TLC", 22 de Mayo [en línea] <http://www.portafolio.co/negocios/ex-im-bank-y-bancoldex-impulsan-el-comercio-el-tlc>, consultado el 14 de Junio de 2012.
- PROLOG (2011). "Market Report 'Mexico Defence & Security Report 2011', published" fuente Business Monitor International [en línea] <http://www.prlog.org/11205316-market-report-mexico-defence-security-report-2011-published.html>, consultado el 15 de enero 2012.
- Rebelión (2002). "Variedades de maíz prohibidas para consumo humano fueron encontradas en la ayuda alimentaria del programa PL-480 en Bolivia" 12 junio [en línea] <http://www.rebelion.org/hereroteca/ecologia/maiz120602.htm>, consultado 18 junio 2012
- Romano, Silvina (2011). "Obama y la Alianza para el Progreso: La retórica del desarrollo y la práctica de la 'seguridad interna'" *Revista Izquierda*, nº 16 pp 62-69. [Http://www.laboratoriodeproduccion.com/?p=224](http://www.laboratoriodeproduccion.com/?p=224)
- Romano, Silvina y Delgado Ramos, Gian Carlo (2011). "Proyectos alternativos y la apuesta por el retorno de la derecha en América Latina" **Rebelión**, [en línea] www.rebelion.org/docs/138913.pdf
- Rosenau, William (2007). "Subversion and Insurgency" RAND Counterinsurgency Study, Paper 2 [en línea] [www.rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2007/RAND_OP172.pdf](http://rand.org/content/dam/rand/pubs/occasional_papers/2007/RAND_OP172.pdf), consultado 25 junio 2008
- Sanati, Cyrus (2010). "Money Laundering: The Drug Problem at Banks", **The New York Times**. 29 de Junio [en linea] <http://dealbook.nytimes.com/2010/06/29/money-laundering-the-drug-problem-at-banks/>, consultado el 14 de Junio de 2012.
- Saxe Fernandez, John (2009). "Tras golpe en Honduras está la señal del gobierno de Obama" *El Semanario-Universidad*, Del 07 al 14 de octubre. Edición 1825. Año XIII. San Jose, Costa Rica [en línea] <http://jsaxef.blogspot.com>, consultado el 15 de septiembre de 2011.
- Saxe Fernandez, John (2001). "América Latina – Estados Unidos en la posguerra fría: apuntes estratégicos preliminares" en Saxe-Fernández, John., Petras, James., Veltmeyer, Henry., Núñez, Omar. **Globalización, imperialismo y clase social**. Lumen/Humanitas. Buenos Aires, Argentina.
- Schmitt, Eric., Mazzetti, Mark., y Shanker, Thom (2012). "Admiral Seeks Free Hand in Deployment of Elite Forces" *The New York Times*. 12 de Febrero [en línea] www.nytimes.com/2012/02/13/us/admiral-pushes-for-free-hand-in-special-forces.html?pagewanted=all, consultado el 14 de Junio de 2012.
- Seelke, Clare R., Wyler, Liana S., y Beittel, June S (2010). Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and US Counter drug Programs. Congressional Research Service. Washington.

- Stockholm International Peace Research Institute SIPRI (2011). Background paper on SIPRI military expenditure, data 2010 [en línea] www.sipri.org/research/armaments/.../factsheets/20, consultado el 15 de febrero de 2012
- The New York Times (2012) "United States Special Operations Command", 05/06/12 [en linea] http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/s/united_states_special_operations_command/index.html, consultado el 5 de junio 2012
- Tokatlán (2006). "After Iraq: Next Colombia? The United States and (in)security in South America en Brian Loveman (ed.) **Addicted to Failure. US Security Policy in Latin America and the Andean Region.** Rowman & Littlefield. Maryland.
- United States Department of State. Foreign Relations. 1961-1963. Vol VIII. Doc. 10.
- United States Department of State. Foreign Relations, 1961-1963, Vol XII, Doc. 90.
- U.S. Joint Chiefs of Staff (2004). **Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms**, Joint Pub 1-02. Washington, D.C.: U.S. Joint Chiefs of Staff, 7 de Octubre.
- USAID (2010). US overseas loans and grants (2009-2010) [en linea] <http://gbk.Eads.usaidallnet.gov/data/fast-facts.html>, consultado el 20 de octubre 2011.
- Wills, Garry (2010). **Bomb power. The modern presidency and the national security state.** Penguin Books. New York.

